

JOSÉ LUIS MARTÍN RAMOS

GUERRA Y REVOLUCIÓN EN CATALUÑA

1936-1939



CRÍTICA

PRÓLOGO DE ÁNGEL VIÑAS

José Luis Martín Ramos

GUERRA Y REVOLUCIÓN EN CATALUÑA

1936-1939

CRÍTICA
BARCELONA

Primera edición: abril de 2018

Guerra y revolución en Cataluña, 1936-1939
José Luis Martín Ramos

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal)

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47

© José Luis Martín Ramos, 2018

© Editorial Planeta S. A., 2018
Av. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona (España)
Crítica es un sello editorial de Editorial Planeta, S. A.

editorial@ed-critica.es
www.ed-critica.es

ISBN: 978-84-17067-74-8
Depósito legal: B. 6010 - 2018
2018. Impreso y encuadernado en España por Huertas Industrias Gráficas S. A.

El papel utilizado para la impresión de este libro es 100% libre de cloro y está calificado como papel ecológico.

Índice de contenidos

Prólogo	IX
Presentación	XIII
1. Sublevación y revolución	1
2. Verano de violencias	31
3. El pacto de octubre	65
4. Primer tropiezo	113
5. Ruptura de la retaguardia	153
6. Mayo y sus secuelas	195
7. Un nuevo escenario de guerra y política	229
8. PSUC y ERC, frente a frente	257
9. La batalla de la nueva economía	285
10. Cataluña, capital para la República	323
11. Invasión y resistencia	363
12. Derrota	395
Notas	425
Fuentes primarias y bibliografía	509
Listado de siglas	513
Índice analítico	515

1

Sublevación y revolución

DERROTA DEL GOLPE A DOS MANOS

La sublevación militar del 19 de julio no cogió desprevenido al Gobierno de la Generalidad, cuyo plan conocía y tenía preparada la respuesta.¹ Tampoco a las organizaciones políticas y obreras, aunque no todas ellas estaban en las mismas condiciones y disposición de intervenir en la lucha contra los sublevados; en la CNT, con su experiencia insurreccional, el Comité de Defensa encabezado por García Oliver había elaborado también su propio plan.² Ambos compartían el objetivo inmediato, la derrota de los militares facciosos, pero no la previsión del desenlace final. El de Companys, presidente de la Generalidad. Espanya, consejero de Gobernación, y Escofet, comisario general de Orden Público, era el restablecimiento del orden republicano; el de García Oliver, crear el escenario que permitiera desencadenar la «revolución social». No obstante, entre ellos hubo una coincidencia táctica: no tomar la iniciativa y esperar a que se iniciara el golpe para pasar a la acción.³ Para Companys era una opción obligada; había intentado en vano que Casares Quiroga tomara la iniciativa y evitara el golpe, y tampoco consiguió que el capitán general de la División con sede en Barcelona, Llano de la Encomienda, arrestara a los militares conspiradores.⁴ Por parte del Comité de Defensa esa actitud formaba parte de su concepción de la revolución como respuesta a la sublevación. En esa actitud común de espera Escofet pidió a la CNT que convocara la huelga del transporte iniciada días atrás para no distraer fuerzas de seguridad en tareas de orden público; petición que la CNT, que tenía su propia agenda, rechazó. El Gobierno de la Generalidad, a su vez, se negó a acceder a la entrega de armas que le reclamaron las organi-

zaciones obreras; lo que les pedía al Front d'Esquerres⁵ y a los dos sindicatos, UGT y CNT, fue apoyo social y político. A pesar de esa negativa de Companys y la actitud vigilante de Escofet, y su jefe de servicios el coronel Vicenç Guarner, no se pudo impedir que el Sindicato Marítimo del Transporte de la CNT asaltara dos buques mercantes anclados en el puerto de Barcelona y se hiciera con un centenar y medio de fusiles de sus santabárbaras, que Guarner consiguió recuperar solo en una pequeña parte;⁶ tampoco un reparto limitado de fusiles, del antiguo Somatén y de escasa calidad, que en la noche del 18 de julio llevó a cabo por su cuenta un grupo de capitanes de aviación encabezados por Servando Meana y Albert Bayo, sin contar con ninguna autorización de la Generalidad.⁷ Todavía en la noche del 18 al 19 de julio Escofet, aduciendo que la rebelión no había de estallar en las próximas horas, se quitó de encima a García Oliver, Durruti y Ascaso, que le insistían en el reparto de al menos un millar de fusiles, para equipar a los miembros de los grupos de defensa anarcosindicalistas. Ese muy escaso bagaje de armamento, más el también limitado que ya tenía en su poder el Comité de Defensa de la CNT, y las pistolas y algún arma larga de los grupos de autodefensa de los partidos fue todo el equipo con el que contaban las organizaciones obreras para enfrentarse a los sublevados; la única arma de guerra algo contundente era una ametralladora Hotchkiss, que el Comité de Defensa de la CNT había adquirido en Asturias aquel mismo julio.⁸ No estaba en sus manos derrotar a los militares, como no lo había estado en ninguna de las pasadas insurrecciones anarquistas.

La principal respuesta al levantamiento militar en Barcelona había de partir de sus fuerzas de orden público; sobre todo de la Guardia de Seguridad y Asalto, ya que sobre la Guardia Civil había dudas del comportamiento de sus mandos intermedios y miembros del cuerpo. Espanya y Guarner contaban con casi dos mil guardias, dieciséis ametralladoras y ocho morteros ligeros —aparte del contingente de casi mil quinientos efectivos de la Guardia Civil en Barcelona— para hacer frente a unos cinco mil soldados con sus mandos, con dos docenas de piezas de artillería, 48 ametralladoras y una veintena de morteros pesados que podían poner en las calles de la capital catalana los sublevados.⁹ La Generalidad esperaba, además, que la desventaja de los rebeldes sería la dispersión de los puntos de salida de sus fuerzas y la ventaja de las fuerzas leales disponer de un plan conjunto de respuesta a la salida a la calle, así como la profesionalidad de sus miembros en contraste con la dudosa capacidad combativa de los soldados de reemplazo. Ésas eran las disposiciones de inicio, pero luego el desarrollo de los acontecimientos impuso sus propias conse-

cuencias. Cuando las tropas salieron de los cuarteles, en la madrugada del 19 de julio, el despliegue de las fuerzas de orden público tuvo la compañía del sonido de las sirenas de las fábricas convocando a la huelga general y a la movilización contra el golpe; grupos de civiles armados, la inmensa mayoría militantes de sindicatos y partidos obreros, reforzaron la acción en los barrios populares de los dos extremos de la ciudad (Poblesec y el Paral·lel; Poblenou y Sant Andreu) multiplicando los escenarios de combate a los que tenían que enfrentarse los sublevados; finalmente, aunque con algo de suspense, quizás de vacilación, la Guardia Civil salió a la calle para sumarse a la defensa de la República. Guardias y civiles, obreros en su inmensa mayoría, configuraron un binomio de colaboración, con dinámicas inéditas de confraternización, que dieron las principales imágenes icónicas de los tres días de julio. En el resto de las poblaciones catalanas con guarnición militar —Girona, Lleida, Tarragona, Mataró, La Seu d’Urgell— la intervención de las fuerzas de orden de la Generalidad no resultó tan destacada, ni decisiva; pero en todas ellas el factor clave fue la pasividad y las vacilaciones de los conspiradores que, sobre todo en Girona y Lleida, dilapidaron el factor sorpresa a la espera de cómo se resolviera la situación en Barcelona. Cuando se consumó la derrota de los sublevados en la capital catalana, ninguna guarnición, ningún grupo de oficiales se planteó la quimera de resistir. No obstante, la lamentable acción de los militares facciosos había dado como resultado una radical modificación del escenario social y político catalán.

En la movilización de civiles armados el protagonismo mayor correspondió a la CNT; no era ya la organización que antaño había monopolizado el movimiento obrero de la capital catalana, pero sí seguía siendo mayoritaria y la única que contaba con una estructura paramilitar en torno a los comités de defensa. Los anarcosindicalistas estuvieron en los enfrentamientos del Paral·lel, de la Plaça de Catalunya, de Atarazanas, de la Barceloneta; fueron los que cubrieron más campo. Sin embargo, hubo también otras participaciones, de menor cuantía, que expresaron la pluralidad, aunque fuera desigual, de la respuesta popular y obrera: del POUM, dirigido en su acción por Josep Rovira que se presentó en las Ramblas, en Plaça de Catalunya, en Atarazanas;¹⁰ de la UGT y la Federación Socialista Catalana, Desiderio Trilles y un grupo de portuarios, junto con guardias de Asalto, rindieron un contingente de tropas de artillería que marchaban hacia el centro desde el cuartel de Sant Andreu, y Joaquín Fernández, *el Negus*, un maestro de la Agrupación Socialista de Barcelona, lideró una barricada en las inmediaciones de las Ramblas;¹¹ Jové Bru-fau, de la Unió Socialista de Catalunya, murió en los combates de Plaça

de Catalunya;¹² también afiliados de Estat Català y de Esquerra Republicana de Catalunya intervinieron en diversos lugares, en la Diagonal, la Plaça del Cinc D'Oros y sus inmediaciones¹³ y el barrio de Poble-sec.¹⁴ Esa movilización obrera armada, en su inicio altamente voluntarista y claramente precaria en potencia de fuego, habría sido más que probablemente derrotada sin la intervención de las fuerzas de orden público; es exagerado sostener que fue la «respuesta obrera», sin más, la que conjuró la rebelión, aunque tampoco es exacto que «el famoso pueblo en armas» no apareció hasta el día 21, cuando todo estaba a resuelto.¹⁵

Cierto, la masa de la población obrera salió a la calle el último día de los combates, pero «pueblo en armas» eran ya los militantes que empezaron a actuar desde la mañana del 19 de julio y que paso a paso acabaron sumando algún millar. El protagonismo fue doble y el desenlace no se entiende sin contar con todos, aunque con el transcurso del combate en las calles varió la proporción. La participación obrera y popular fue en aumento a lo largo de aquellos tres días, en tanto que la de las fuerzas de orden, decisiva en las primeras horas, empezó a perder peso. El número de agentes del orden solo podía disminuir con las bajas causadas por los enfrentamientos, a diferencia de los civiles, que crecía y se armaba a medida que los sublevados reulaban; por otra parte, el vaciado de los cuarteles acelerado por la orden del gobierno Giral de «disolver» el ejército dejó sus puertas abiertas a la ocupación popular. Las armas del cuartel del Bruc, las de los del barrio de Sant Andreu, que incluía el depósito general de la División, quedaron a merced de una multitud que, como escribió García Oliver, por primera vez se sentía vencedora de los militares. La Generalidad que siempre rehusó la entrega de armas a la población, ni a las organizaciones obreras, no pudo finalmente impedirlo. Evitar el asalto al cuartel de Sant Andreu habría significado enviar fuerzas de orden público contra la multitud y abrir un nuevo frente interno de lucha cuando todavía no se había dominado plenamente la situación; sin tener muchas garantías de éxito, además, ya que el control de esas fuerzas empezaba a ser precario.¹⁶

Como en el resto de la España no dominada por los sublevados el precio resultó muy elevado para la República, que sin caer por completo se tambaleó hasta casi tocar tierra con la frente. La decisión de Giral y la dispersión masiva de armas entre la población, dificultó la reacción ante la transformación del golpe en guerra civil situando a la República a la defensiva y propició la pérdida del control del orden interior, dominado en los primeros meses por una importante violencia reactiva. En Cataluña se le sumó una tercera consecuencia, la huida o la expulsión de los patro-

nos y sus cargos de confianza dieron paso a la ocupación de las fábricas, los talleres, los comercios, los servicios de transporte, por sus trabajadores y empleados, en un proceso de apropiación sindical, no organizado previamente. Los obreros tomaron las calles, los centros de producción y distribución, muchas casas de los amos, los locales de los partidos e instituciones de la derecha; no obstante, no consumaron una plena toma del poder. Entre la supervivencia en precario de las instituciones y del aparato de Gobierno de la Generalidad y la ocupación apoyada en las armas por parte de los trabajadores se configuró una situación de *impasse* que ninguno de los dos protagonistas decidió decantar de inmediato en su favor, por el temor a perder lo mantenido o lo conseguido. El resultado fue un pacto político en el que cada uno buscó consolidar sus posiciones y ganar tiempo para mejorarlas e imponer un escenario de poder más definido.

Lluís Companys inició la gestación de ese pacto el mismo 20 de julio al convocar a las diversas organizaciones obreras, y no sólo a la CNT-FAI como se acostumbra a escribir,¹⁷ en el Palacio de la Generalidad. A la llamada acudieron García Oliver, Durruti, Aurelio Fernández, Asens y Abad de Santillán, por la CNT-FAI, Comorera, de la USC, Nín y Josep Rovira del POUM, y es probable que el comunista José del Barrio en representación de la UGT. Tras reconocerles que eran los dueños de la calle, Companys los invitó a formar «todos unidos en un organismo de combate, que podría ser un Comité de Milicias Antifascistas [para que] asumiese la dirección de la lucha en Cataluña»;¹⁸ paralelamente, el presidente de la Generalidad habría reunido a los representantes del Front d'Esquerres,¹⁹ que plantearon algún reparo pero ningún obstáculo a la iniciativa. Companys no estaba en condiciones de actuar como le exigió, a toro pasado, Claudi Ametlla, dirigente de Acció Catalana Republicana (ACR): «Matar la Revolución, como mató la sublevación militar»;²⁰ algo más fácil de decir que de hacer, que el propio Ametlla no consta que lo propusiera entonces sino cuando escribió sus memorias. Companys no estaba dispuesto, ni capacitado, ni política ni técnicamente —las fuerzas de orden público se estaban dispersando y debilitando— para «matar la revolución», por lo que buscó neutralizar la amenaza que procedía de la ocupación de la calle por los trabajadores en armas integrando a las organizaciones obreras en un organismo unitario, complementario de la propia Generalidad. Esa opción era la única que tenía camino por recorrer, la otra no tenía ni posibilidad de empezar. La posición de Companys no era, como comentó despectivamente Ametlla, de empatía con los anarquistas, ni un acto de genuflexión ante la movilización obrera, sino el reconocimiento del nuevo escenario y la manera de salvaguardar

la Generalidad; a lo largo de la guerra, la política de pacto entre las organizaciones sería la única manera de renovar la legitimidad de las instituciones, habida cuenta de la imposibilidad de hacerlo mediante el voto popular directo.

La oferta le dio la iniciativa a Companys. Por poco tiempo, entre el 20 y el 21 de julio la confirmación del pacto quedó a la espera de la respuesta anarquista y, entretanto, se agravó la situación interna con una oleada de asaltos a iglesias y conventos y el comienzo de la violencia a cargo de patrullas irregulares de civiles armados, unas promovidas por los comités que se formaban en el ámbito territorial o en el del trabajo, otras por propia cuenta. Todo quedó supeditado a la respuesta anarquista; el Front d'Esquerres, como consecuencia de la bilateralidad que Companys tuvo que admitir con la CNT, quedó marginado, reducido a asentir sin poder imponer por su parte ni una sola condición. El presidente de la Generalidad, entretanto, intentó avanzar sobre su propio criterio y, ayudado por Ametlla,²¹ redactó un decreto de constitución de las denominadas alternativamente «milicias ciudadanas» y «milicia popular»²² y del «comité de enlace y dirección» de las mismas, publicado en el *Butlletí Oficial de la Generalitat*, el 21 de julio por la mañana y comunicado por el propio Ametlla a través de la radio.

El decreto atribuía a Lluís Prunés, en calidad de «comisario de Defensa de la Generalidad», la organización de las milicias y se configuraba el propuesto comité integrado, sin distinción de jerarquía, por un representante del Gobierno de la Generalidad, otro de la Comisaría General de Orden Público y los de las organizaciones políticas y sindicales antifascistas; además instaba a constituir en toda Cataluña los correspondientes comités locales, bajo la presidencia del comisario de la Generalidad, la máxima autoridad local o quien ésta designara en su representación. Companys dispuso también que todos los destacamentos de la Guardia Civil se concentraran en Barcelona; ¿lo hizo para reforzar la posición del Gobierno de la Generalidad o para alejar a la Guardia Civil del contacto directo con la población y evitar enfrentamientos que pusieran en peligro el pacto todavía no confirmado? No hay documentación que nos aclare sus intenciones. La instrucción alarmó a la CNT, que temió que fuera el preludio de una intervención de dicha fuerza²³ y finalmente su cumplimiento quedó a medias; no hubo concentración única en la capital catalana, pero la Guardia Civil se retiró de sus puestos en los pueblos y ciudades pequeñas y quedó acuartelada en las capitales de provincia. Las consecuencias de la medida fueron negativas para el control del orden interno por la Generalidad; las historias locales demuestran que esa retirada faci-

litó la posición y la acción de los comités locales y acabó con el único freno que hubiera podido enfrentarse a la violencia, aunque tampoco podemos saber qué éxito habrían tenido.

La CNT catalana tomó su decisión en una reunión de delegados, plenaria, en la tarde del 21.²⁴ El secretario del Comité Regional, Mariano R. Vázquez (*Marianet*) defendió aceptar la propuesta de Companys, apoyado por Abad de Santillán y Federica Montseny; por el contrario, José Xena, delegado del Baix Llobregat, propuso rechazarlo e ir a la implantación del comunismo libertario, a lo que se sumó García Oliver con su propuesta de «ir a por todas». Abad de Santillán argumentó que eso era imposible, con los buques de guerra de las potencias europeas fondeados frente a Barcelona; García Oliver y Xena se quedaron solos; Durruti calló, como el resto de miembros del grupo Nosotros;²⁵ y Manuel Escorza intentó una propuesta intermedia: utilizar la Generalidad para socializar la economía y deshacerse de ella cuando dejara de serle útil a la CNT.²⁶ De manera casi unánime, con el único voto en contra de García Oliver y Xena, el pleno regional descartó la proclamación del comunismo libertario y se resolvió a favor de una propuesta pragmática que les concedía una posición política, de control social y de control sobre la producción y el trabajo, como la CNT nunca había tenido. La victoria final quedó aplazada al mañana, pensando que por el momento bastante había con haber puesto los fundamentos. Joaquín Acaso escribió en 1938: «El control económico, recuperado en su totalidad por mediación de nuestras industrias, nos daría, si era llevado con inteligencia, el mando político del mañana».²⁷ Con la aceptación de un comité conjunto la CNT entendió haber hecho su concesión máxima, por lo que no siguió el guion del decreto del 21 de julio. En la reunión de constitución del comité, a la que asistieron Prunés y el comandante Pérez Farrás, en nombre de la Generalidad,²⁸ supuestos por ésta como mandos de las futuras milicias, se marginó esa representación institucional y se estableció un reparto de responsabilidades que nada tenía que ver con las intenciones del decreto de Companys, adjudicando Guerra a García Oliver y Seguridad Interior a Aurelio Fernández —al que se sumó Vidiella—, no a Pérez Farrás y Guarnier. Por otra parte, además de dar por constituido el Comité de Milicias de Cataluña se proclamó el establecimiento de «un orden revolucionario al mantenimiento del cual se comprometen todas las organizaciones que integran el comité»,²⁹ con la única discrepancia de Artemi Aiguader, de ERC, que intentó sin éxito evitar el término «orden revolucionario»; con todo lo sucedido nadie negaba que se asistía a una situación «revolucionaria», aunque cada quien la entendiera a su manera.

Aunque no con todas las características que Companys había querido, el pacto se consumó. La CNT, a cambio de aceptar el principio fijó el detalle de su concreción y se atribuyó la parte del león en las responsabilidades del que pasó a denominarse Comité Central de Milicias Antifascistas (CCMA). No había formado parte de la pretensión de Companys establecer una relación horizontal entre la Generalidad y el Comité, pero no pudo evitarla. De manera que se estableció una dualidad funcional, mediante la cual el Gobierno de la Generalidad se ganaba un tiempo para situarse de nuevo, reevaluar su fuerza y recuperar el equilibrio y las organizaciones obreras se veían dueñas de los dos espacios que consideraban propios, el mundo del trabajo y el espacio de la movilización, para la guerra y para el orden interno.

El poder no estaba dividido, sino compartido en la cúspide y muy fragmentado en la base. No se estableció una dualidad de poder entre el Gobierno de la Generalidad y el CCMA, como se ha venido repitiendo de manera cansina;³⁰ no compitieron entre sí por controlarlo todo, cooperaron en algunos aspectos, se ignoraron en otros y en el que protagonizaron la mayor concurrencia fue en el de la seguridad interior. La Generalidad sobrevivió y con ella el sistema republicano, aunque temporalmente maltratado y con algunas funciones disminuidas; y también obligado a dar una respuesta a los deseos e intereses de la nueva base social del antifascismo en guerra, la suma de la mayoría de la base social de la anterior situación republicana y de los nuevos sectores incorporados a la lucha contra los militares y el fascismo el 19 de julio. Por su parte, el CCMA apenas tuvo de «central» el título, fue un organismo de suma y coordinación de esfuerzos, de deliberación de las organizaciones antifascistas; no obstante, su autoridad real no alcanzaba al frente, donde cada columna miliciana actuaba por su cuenta, ni pasó en el control del orden interno del ámbito de capital catalana, más allá de la cual en cada localidad su propio comité se erigió en autoridad soberana.

La supervivencia de la Generalidad se manifestó manteniendo una mínima actuación de gobierno que cuando no tuvo el respaldo de fuerza no pudo pasar del papel, de la publicación de disposiciones en el *Butlletí Oficial*,³¹ aunque sí produjo resultados en otros ámbitos, cuando su actuación se concertó con una posición que le era favorable proporcionándole la fuerza suficiente para imponer su actividad. El exponente más importante de su impotencia se produjo en el ámbito del orden público y la seguridad de retaguardia y el de la gestión de la guerra, donde nunca consiguió imponer su plena autoridad antes de mayo de 1937. No es que no lo intentara desde un principio, pero no tuvo ningún éxito. El tímido

intento del consejero de Gobernación por recomponer la Guardia de Asalto se enfrentó a la dispersión de los guardias que no empezaron a regresar, y no todos, a sus cuarteles y comisarías hasta el día de la percepción de haberes. También intentó la Generalidad reconstituir el ejército, la IV División orgánica, nombrando para ello el 23 de julio al general Aranguren, con la ayuda de oficiales de la Unión Militar Republicana Antifascista, pero su gestión en los cuarteles fue impedida por quienes ocupaban las calles;³² o por decisiones formales del correspondiente comité local, como el de Girona, en el que el anarquista Francisco Isgleas desautorizó la medida, defendiendo la exclusividad de las milicias voluntarias, en el frente y en la retaguardia. La excepción se produjo en Tarragona, donde se mantuvo la integridad de la guarnición el Regimiento de infantería n.º 15 de Almansa, para ser más adelante movilizado hacia el frente. La Generalidad fracasó y pocos días después el CCMA acordó controlar los cuarteles y la formación de un ejército mixto de milicianos y soldados bajo el mando de oficiales escogidos por el propio CCMA.³³ Entre una cosa y otra, se desvanecieron los intentos de la Generalidad por recuperar el monopolio del uso legal de la violencia. Por el contrario, la acción del gobierno fue efectiva, y productiva en materia financiera; empezando con la concertación con los bancos para el pago de salarios impulsada por el decreto de 23 de julio —que evitó un caos mayor ante el impago de jornales— y culminando con la incautación provisional por parte de la Consejería de Finanzas de la sucursal de Banco de España y las delegaciones de Hacienda de la República en Cataluña y la emisión, incluso, de papel moneda.³⁴ Esa actuación fue posible por la colaboración directa de la UGT, que era el sindicato abrumadoramente mayoritario en el sector bancario y que decidió reconocer la plena autoridad de la Generalidad, y facilitar que la ejecutara en sus decisiones fundamentales; por otra parte la CNT, débil en este terreno con criterios muy dispares y sin ideas claras sobre el funcionamiento financiero y monetario —la prueba la darían en 1938 con sus discusiones internas sobre un hipotético banco sindical—, no discutió la supremacía de la UGT en el sector ni negó a la Generalidad su competencia financiera.

Las limitaciones del CCMA, por su parte, se fijaron desde el primer momento cuando en todas partes del territorio se constituyeron comités que, al margen de la diversa relación que establecieran con sus ayuntamientos, compartieron la decisión de autoconstituirse en poder por sí mismos en la localidad, con la máxima independencia que les fuera posible con respecto a las instituciones municipales y a las instituciones de la Generalidad e incluso, frecuentemente, a las mismas direcciones de las

organizaciones partidarias a las que los miembros de los comités pertenecían. De la misma manera que tampoco hubo control desde arriba de la nueva fuerza miliciana; los cuarteles y las columnas de voluntarios pasaron a ser de cada organización, no constituyeron ningún tipo de alternativa centralizada al antiguo ejército.

CATALUÑA EN COMITÉS

La primera reacción en el ámbito local al golpe militar fue la activación simultánea, a veces coincidente otras no, de comités políticos de unidad antifascista con precedente en los comités de apoyo al Front d'Esquerres —con denominaciones diversas, entre ellas la de «comité de salud pública»— y unos nuevos Comités de Defensa, promovidos en su gran mayoría por la CNT-FAI, aunque el hecho de ser propuestos también por el decreto del 21 de julio y el anuncio radiado de Claudi Ametlla favoreció la incorporación a ellos de militantes republicanos y de otras organizaciones obreras. No pocos de esos nuevos comités se constituyeron en presencia del alcalde, siempre que fuera de izquierdas; no tanto por respeto a la legalidad, que en la dinámica del momento podía parecer secundario o menos, sino como reconocimiento del peso político que se podía seguir ejerciendo a condición de interpretar adecuadamente la nueva situación.

La constitución del Comité Central de Milicias Antifascistas actuó luego como ejemplo y los comités políticos y «de defensa» allí donde habían nacido por separado se unificaron bajo el nombre de Comité Local de Milicias Antifascistas u otros similares. En Manresa³⁵ dos militantes anarquistas llegados de Barcelona, dos o tres días después del 19 de julio, al volante de dos camiones cargados de armas procedentes del cuartel de Sant Andreu, constituyeron un Comité de Enlace Antifascista de las comarcas del Bages y Berguedà, que compitió con el Comité Antifascista local; ambos organizaron sus milicias para el frente y sus patrullas de represión interna, aunque en esta última faceta el que más se distinguió fue el encabezado por los dos anarquistas de Barcelona, al que se sumó el líder de la CNT local, Josep Corbella. Finalmente, a instancias del Comité Antifascista local y con el arbitraje del comité regional de la CNT, el 10 de agosto se fundieron en uno los dos organismos, con el nombre de Comité Central Antifascista de Manresa y con Corbella como su secretario. Aunque no siempre se produjo una unificación, como en Badalona,³⁶ donde la dualidad entre comité de unidad antifascista y comité «de guerra» —su equivalente del «de defensa»— se mantuvo algún tiempo y

coexistió con la supervivencia de comités de barriadas que no se sometían a ninguna autoridad, ni de uno ni de otro.

Los comités generaron una dinámica de funcionamiento alternativo en diversos campos: la movilización para la guerra, el control social, la seguridad interior, el abastecimiento a la población y a las milicias. También asumieron funciones extraordinarias, en particular, el fomento de obras públicas, muchas veces de fortificación, de «defensa», pero no exclusivamente; que en ocasiones tuvieron fueron respuestas de absorción del paro local, y otras vinieron a cumplir proyectos previstos como en Igualada,³⁷ donde el comité impulsó la construcción de una represa largo tiempo esperada. La expansión del empleo público, más allá de la absorción del paro, fue uno de los argumentos del Comité Antifascista de Manresa para impulsar un plan general de derribo de edificios religiosos, que habría tenido que ir acompañado con la construcción de nuevos edificios y reformas urbanísticas. Los comités asumieron el protagonismo local y frecuentemente «desbordaron» a los ayuntamientos o a los alcaldes, pero no llegó a haber sustitución global de una estructura de poder local por otra nueva. En su mayoría los ayuntamientos sobrevivieron, coexistiendo con los comités, por más que casi siempre subordinados a éstos y con funciones disminuidas, sobre todo en comparación con las que asumieron los comités; por otra parte, las funciones específicas de los comités eran de naturaleza tal que nunca habrían correspondido a los ayuntamientos (guerra, represión social y política). Solo muy excepcionalmente desapareció el ayuntamiento por completo y fue sustituido por un organismo nuevo que nada tuvo que ver, ni siquiera en su composición personal, con el anterior poder municipal.

En Tortosa,³⁸ en la segunda quincena de agosto, la CNT, dirigida por un grupo llegado en las primeras semanas de la guerra de fuera de la ciudad, forzó la caída del ayuntamiento electo y su sustitución por una junta municipal. Más importante fue el caso de Lleida,³⁹ cuyo ayuntamiento, controlado por ERC, fue sustituido por un comité municipal que, de acuerdo con el reparto de poderes que las organizaciones obreras establecieron en la ciudad, quedó controlado por la CNT. Salvo esos y otros casos menores, en el resto de poblaciones el ayuntamiento subsistió casi siempre, aunque fuera en letargo o con funciones disminuidas frente a los comités; en cumplimiento del decreto de la Generalidad del 22 de julio⁴⁰ fueron destituidos todos los concejales que no pertenecieran a organizaciones del Frente Popular y sustituidos por miembros de éstas, destitución que en muchos casos era ya ociosa, porque habían sido apartados de hecho del consistorio desde los primeros días de la guerra. Su actividad fue

más o menos limitada, tirando a menos, en los meses del verano; no obstante, ya a partir de primeros de septiembre, en las poblaciones más importantes y antes de que llegara a constituirse el gobierno de unidad a finales de septiembre y se disolvieran los comités, las comisiones de gobierno y los plenos empezaron a reunirse de nuevo.

La relación entre ayuntamientos y comités fue dispar. Considerando las poblaciones con más de 10.000 habitantes, en Olot, Figueres, Girona, Sant Feliu de Guíxols, Vic, Granollers e Igualada,⁴¹ el ayuntamiento quedó bajo mínimos, con depuraciones de empleados municipales impuestas por los comités, y en Vilafranca del Penedès, Tortosa y Lleida la institución desapareció;⁴² por el contrario, en Barcelona, Mataró, Santa Coloma de Gramenet, Vilanova i la Geltrú y Valls⁴³ el ayuntamiento mantuvo cierta actividad, sin conflicto con los comités, así como en Tarragona,⁴⁴ aunque aquí su protagonismo quedó eclipsado por la actuación del nuevo comisario de la Generalidad, Lluís Mestres.⁴⁵ No hay indicios de que esa relación diferente responda a una pauta anterior. Olot y Vic habían estado gobernadas por la Lliga Regionalista y los tradicionalistas desde las elecciones municipales de 1934 hasta poco después del triunfo del Frente Popular, pero en el resto de poblaciones el ayuntamiento siempre había estado en manos de ERC, o de ACR. Respondió al desarrollo de los hechos a partir de julio y a la mayor o menor contundencia con la que actuaron, respectivamente, anarquistas y republicanos.

Ejemplo claro de esto último fue lo que ocurrió en el Vallès Occidental, donde contrastó el abierto enfrentamiento en Terrassa entre el alcalde, de ERC, Samuel Morera, y el comité, con la sintonía que en Sabadell se produjo entre la institución municipal y el movimiento obrero.⁴⁶ El conflicto en Terrassa empezó cuando Morera intentó hacer frente a la violencia, iniciada el 25 de julio con el asalto a la casa Cadafalch; el alcalde reclamó a la Generalidad un destacamento de Guardia de Asalto que entró en la ciudad el 27, reforzado cuatro días después con otro de la Guardia Civil, y las fuerzas de orden público controlaron las entradas de la ciudad y detuvieron una veintena de los asaltantes del 25 de julio. Protestada esa reacción por la CNT-FAI, el Comité Local de Milicias Antifascistas, constituido el 1 de agosto, consiguió que aquellas fuerzas se limitaran a la vigilancia rutinaria de edificios. La ruptura entre el alcalde y el comité fue absoluta, y la organización local de Esquerra Republicana acabó dejando en la estacada a Morera, que dimitió el 14 de agosto, para ser sustituido en la alcaldía por otro militante del partido, en mejor sintonía con la organización obrera local; quien controló la ciudad pasó a ser el Comité de Investigación y Defensa, emanado del Comité Local de Mili-

cias Antifascistas, bajo la dirección del faísta Pedro Alcocer, aunque sus miembros eran tanto anarquistas como republicanos.⁴⁷ En Sabadell, un Sindicato de Oposición que no se había reintegrado a la CNT, dirigido por Josep Moix, dominaba el movimiento obrero local; el sindicato se integró en los inicios de la guerra civil en la UGT y en la política local apoyó el reconocimiento de la autoridad institucional, de manera que su ayuntamiento fue, dentro de lo que cabía, uno de los que se mantuvo más activo en toda Cataluña.

En Manresa el alcalde llegó a ser «presidente de honor» del Comité; su presencia fue simbólica, sin peso político, aunque fue el pleno del ayuntamiento el que aceptó y financió el derribo de iglesias. Ese comportamiento ayuda a entender las relaciones entre ayuntamientos y comités: estos tomaban las decisiones políticas y, frecuentemente, dejaban a los ayuntamientos la acción administrativa. El ayuntamiento sobrevivió en ocasiones sólo por la intervención personal del alcalde, quien a veces presidió formalmente el comité, en una muestra de legalismo que quizás sorprenda, pero que formaba parte de la complejidad del momento, en la que se combinaba pacto e incertidumbre. Hubo actividad administrativa de los ayuntamientos y actividad personal de los alcaldes y algún regidor, pero muy escasa actividad plenaria de los gobiernos municipales, que no empezó a recuperarse hasta finales de agosto. Cuando se produjo confrontación entre ayuntamientos y comités no fue, en general, tanto en términos de exclusión —con el objetivo de la eliminación de uno u otro— como de competencias y de correlación. En ésta hubo subordinación política de los ayuntamientos a los comités;⁴⁸ lógico, pues lo anómalo habría sido al revés, la subordinación de los comités a los ayuntamientos. Los comités tenían una mayor representatividad social que los ayuntamientos, elegidos en enero de 1934 con una ley municipal que favoreció la representación de las fuerzas locales más votadas, tendiendo a la polarización entre ERC y sus aliados y la derecha, más dispersa, Lliga, radicales, carlistas; esa composición ya no correspondía al mapa político de febrero de 1936 y mucho menos aún al del verano de 1936. Además, y éste era el argumento de última instancia, los comités disponían del uso de la fuerza, las milicias y las patrullas. El poder estaba en la punta del fusil; lo peor era que había muchos fusiles y cada uno disparaba por su cuenta.

El predominio de los comités no llegó a generar una estructura global de poder alternativa a la arquitectura institucional republicana, por muchos desperfectos que ésta hubieses sufrido. Y no es que no se pretendiera. Lo hizo el CCMA, que no pudo nunca llegar a ejercer de Comité Central; algo que, localismos a partes, repugnaba por definición a buena parte

de los anarquistas de los comités locales. No se constituyó una red territorial organizada, ni para coordinarse; y, ni mucho menos, hubo jerarquización entre los diversos comités, sino una «situación de autarquía local».⁴⁹ Algunos comités locales extendieron su influencia más allá de su término municipal, por razones muy diversas que habrían de ser consideradas en el detalle de cada situación: desde la influencia que una localidad ya tenía antes de los sucesos de julio hasta la de la voluntad de hegemonizar o controlar por parte de grupos locales concretos a partir de la nueva situación creada. Girona dio, a la vez, ejemplo de rechazo de la autoridad del CCMA y de aspiración de su comité a convertirse en el polo de autoridad de la provincia; cuando a comienzos de agosto el CCMA envió sus delegados a Girona para que el comité local acatará su autoridad, éste rechazó el «centralismo» de la capital catalana y sostuvo que «conociendo mejor que el Comité Central Antifascista las características y necesidades de los pueblos de dicha provincia, creían que para mantener el orden revolucionario debía ser Gerona la que debía fijar las normas organizativas por las cuales han de regirse las milicias populares»;⁵⁰ uno de los delegados del CCMA respondió, con lucidez, que Girona podía ser a su vez acusada de «centralismo» por las comarcas del Empordà, La Garrotxa, el Maresme «y otras».⁵¹ Otro obstáculo a la articulación de esas redes, o al hegemonismo de una población en determinadas áreas territoriales, fue la confrontación entre poblaciones vecinas: fue el caso del comité de Olot, que no pudo ejercer el liderazgo que pretendía sobre la comarca de La Garrotxa por la competencia del comité vecino de Sant Joan de les Abadesses, dominado por la CNT-FAI y mucho más radicalizado;⁵² o el de Puigcerdà, en manos de los anarquistas, cuyo liderazgo fue rechazado por el de Bellver y buena parte de la Cerdanya.

Los proyectos de articular una red territorial de comités fueron dispersos y débiles. El primero, el del Comité Central de Milicias Antifascistas de Barcelona, se anunció con su gesto de enviar delegados a distintos puntos de Cataluña; en el mejor de los casos obtuvieron muestras de simpatía, de coincidencia políticas, pero nunca voluntad de subordinación ni siquiera de coordinación permanente.⁵³ Cuando se conoció el resultado de esas delegaciones el CCMA acordó impulsar comités comarcales, utilizando la plantilla de las 38 comarcas del proyecto de Pau Vila, y creó la correspondiente Comisión de Milicias Comarcales,⁵⁴ bajo la responsabilidad de Josep Miret, representante del PSUC, pertenencia política que no habría de ayudarlo en la relación con el mundo de los comités locales. Los anarquistas y los republicanos se desentendieron, cada uno por sus razones, y la política comarcal del CCMA fue siempre una entelequia. Tam-

poco logró nada ante el problema del control de las fronteras, ocupadas desde los primeros días de la guerra por grupos heterogéneos de gente armada, sin ninguna coordinación, con muchos objetivos diferentes, algunos con una mera intención de lucro; el 25 de agosto propuso en vano al CCMA la formación de una milicia especial de frontera bajo su autoridad.⁵⁵ Aunque el 4 de septiembre Miret, secundado por Artemi Aiguader, insistió en denunciar la multiplicidad de «servicios de frontera» organizado por «particulares» y reclamar un servicio bajo la dirección única del comité, la respuesta del CCMA el 6 de septiembre fue renunciar a ese servicio propio mediante una solución que quería ser de compromiso: ordenar a la gente armada existente en los pueblos de frontera que no pertenecían a esas localidades que regresaran a sus lugares de origen y adjudicar los servicios de frontera a los comités locales correspondientes, a los que se instaba a actuar de acuerdo con las instrucciones de las secciones de Comarcas y de Investigación del CCMA. Compromiso incumplido, por inexistente en la realidad; los comités locales fronterizos siguieron actuando de manera soberana, negociando en cualquier caso directamente con las organizaciones sindicales, por encima del CCMA.

Sin llegar a nacer el proyecto centralizador del CCMA, la iniciativa de la constitución de organismos comarcales intermedios pasó a algunos comités locales, se desarrolló de una manera desigual y, en cualquier caso, nunca produjo una nueva estructura por encima de los comités, una nueva dinámica por encima de la situación de autarquía local. El 3 de septiembre se reunió una Asamblea de Comités Antifascistas de Girona y comarcas⁵⁶ presidida por los representantes de los comités de Girona, Figueras, Puigcerdà y Olot y a continuación se constituyeron supuestos comités comarcales en cada una de dichas circunscripciones de la provincia, a excepción de la Cerdanya y el Ripollès; sin embargo, esos comités comarcales no fueron exactamente nuevos organismos de coordinación, sino que los comités de capital de comarca tendieron a asumir, o querer asumir, el de comité comarcal, como en el caso del comité de Girona o el comité conjunto de Puigcerdà-Ripoll.⁵⁷ La situación no varió y tampoco hubo coordinación comarcal efectiva en la provincia en la que parece que más cerca se estuvo de ella. En las comarcas de Tarragona no hubo ninguna coordinación generalizada de los comités.⁵⁸ En las tierras de Lleida lo que se produjo fue una imposición por parte del comité de Lleida, sus patrullas y su particular «tribunal popular» cuya actuación fue bastante más allá de la capital; pero eso no indica que hubiera ni centralización ni coordinación desde la capital provincial en el resto de ámbitos. A pequeña escala ese fue también el caso del singular comité de Orriols,⁵⁹ que es

tableció una suerte de fielato revolucionario en el cruce de las carreteras de Girona a Figueres y de Banyoles a la costa, y puntualmente una acción de dominio por la violencia sobre los pueblos vecinos. O el del mencionado Comité Antifascista del Bages y Berguedà, establecido en Manresa. El sentido fundamental de las actuaciones comarcales de esos comités fue la violencia, contra personas o cosas, o en el mejor de los casos la defensa de correligionarios situados en posición minoritaria en sus pueblos; no el de la construcción de un nuevo orden, ni el orden revolucionario que todos proclamaban.

Con las jornadas de julio había tenido lugar un terremoto social y político, sin que llegara a hundirse por completo el «orden republicano» ni que éste fuera sustituido, asimismo por completo, por un nuevo «orden revolucionario». La situación, más que fluida inestable, quedó pendiente de resolver dos tipos de encrucijadas, que a su vez se cruzaban entre sí: qué tipo de «orden» sería el resultante, cómo se resolvería la aparente disyuntiva entre instituciones republicanas y comités; cuál sería el contenido de esa «revolución», en boca de casi todas las organizaciones antifascistas, pero que cada una de ellas concebía de manera diferente, e incluso alguna de ellas —la CNT— de manera diferente en su propio interior, según la corriente o el segmento de organización. De la misma manera que no puede entenderse la complejidad del momento si no consideramos la supervivencia parcial del sistema republicano en concurrencia con la emergencia del movimiento de los comités, tampoco lo haremos si desconocemos el pluralismo de la movilización revolucionaria que eclosionó acto seguido a la derrota de los militares sublevados y sus apoyos fascistas o en deriva hacia el fascismo; ese pluralismo se correspondió con proyectos diferentes de revolución que generaron respuestas políticas diferentes a la resolución del conflicto entre «órdenes» y a los retos de la prolongación de la guerra.

Lo veremos más adelante en este libro, pero vaya como anticipo que frente a una concepción estrictamente proletaria de la revolución, defendida con variantes importantes por la CNT-FAI y el POUM, se propuso una concepción popular propugnada por una nueva fuerza política nacida en los días de la derrota de la sublevación, el PSUC, para dar respuesta a la complejidad social de la movilización que incluía no solo sectores proletarios, sino también campesinos no proletarios (arrendatarios y pequeños propietarios). No hubo revolución y contrarrevolución en la retaguardia catalana, sino diversos modos de concebir y proyectar la revolución; la contrarrevolución estaba en la otra parte, en el bando sublevado que, con el apoyo de los dos faros de la contrarrevolución en Europa, la Alemania nazi y la Italia fascista, habían convertido su fracaso inicial en guerra ci-

vil.⁶⁰ Al pacto político de julio y a la centrifugación y fragmentación política se añadió una tercera consecuencia de las jornadas de julio, la fundación del Partit Socialista Unificat de Catalunya.

EL PARTIDO DEL FRENTE POPULAR

La sublevación y su respuesta no sólo modificó el escenario general, también precipitó un proceso de recomposición política en la izquierda obrera, que venía anunciándose desde comienzos de 1936 y estaba todavía pendiente de materialización. Tras el movimiento de octubre de 1934 se había impuesto en el muy fragmentado campo de los partidos marxistas catalanes una dinámica unitaria, que saltó del estadio de la unidad de acción a la unidad organizativa animada por el relativo éxito de la huelga general convocada por la Alianza Obrera Catalana a pesar de ser secundada, e incluso ser boicoteada en algún caso, por la CNT.⁶¹

En Cataluña no sólo se producía la división entre socialistas y comunistas, sino que entre ellos existía una subdivisión específica heredera de las crisis sufridas por el PSOE y el PCE durante los tiempos de la dictadura de Primo de Rivera, a lo que se había sumado la evolución hacia el comunismo de una parte minoritaria del nacionalismo de izquierdas; de manera que en 1934 había seis partidos marxistas: la organización regional del PCE, que desde 1932 ostentaba la denominación de Partit Comunista de Catalunya (PCC-PCE), sin que por ello significara ningún grado de autonomía real dentro de la Sección Española de la Internacional Comunista (IC); el Bloc Obrer i Camperol (BOC),⁶² fruto de la fusión de la Federación Comunista Catalano-Balear del PCE, liderada por Joaquín Maurín —que había roto con la dirección y había sido excluida de la IC en 1931— con un grupo comunista autóctono, el Partit Comunista Català, promovido por jóvenes procedentes del nacionalismo radical impulsado por Francesc Macià en los años veinte; la Izquierda Comunista de España (ICE), la pequeña fracción trotskista constituida por Andreu Nin;⁶³ la Federación Socialista Catalana (FSC), del PSOE; la Unió Socialista de Catalunya (USC),⁶⁴ una plataforma de acción política promovida en 1923 desde la Federación Socialista por Rafael Campalans y Manuel Serra y Moret, excluida del PSOE en 1925 por sus discrepancias ante el régimen primorriverista, y constituida en partido desde 1931, bajo el impulso organizativo de Joan Comorera;⁶⁵ y el Partit Català Proletari (PCP),⁶⁶ surgido de los grupos de Estat Català que en abril de 1931 rechazaron la integración en ERC y la renuncia de Macià a la República Catalana⁶⁷ y que, mediante la

imagen confederal que proyectaba externamente la URSS y la doctrina leninista del derecho de autodeterminación, había evolucionado hacia el comunismo, sin ingresar en el PCE por su carácter de «sección española».

El debate sobre la unidad desembocó finalmente antes del verano de 1935 en dos proyectos antagónicos. Maurín, que después de octubre de 1934 se proyectó sobre el escenario español, concluyendo que aquella revolución había sido para España lo que la de 1905 para Rusia, se planteó como objetivo inmediato, para conseguir también la «segunda revolución» en España, la constitución del partido de la vanguardia revolucionaria española, que no podría ser ni el reformista PSOE ni el estalinista PCE; se alejó así estricto escenario catalán y abandonó la línea de la revolución catalana que había mantenido desde 1931. Comorera, por el contrario, siguió manteniéndose en el ámbito de la política catalana proponiendo circunscribir la formación de un partido común a Cataluña, rechazando que en 1935 se estuviese ante una situación prerrevolucionaria; desde su prisión, condenado por los sucesos de octubre, sintonizó con la nueva política de la IC, de respuesta al avance del fascismo compartiendo la necesidad de la más amplia unidad para hacerle frente.⁶⁸ Maurín encontró el apoyo de Nin, y el BOC y la ICE se fusionaron en septiembre de 1935 para constituir el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), formación política española, aunque su principal presencia continuó estando en Cataluña. Esa unificación tuvo algún problema: condenada por Trotsky, que consideraba que Maurín tenía posiciones nacionalistas catalanas y sobre todo que apostaba entonces por el entrismo de sus partidarios en las corrientes de izquierda de los partidos socialistas; y rechazada por un sector del BOC, que incluyó algunos de sus cuadros más importantes —entre ellos, Víctor Colomer, Miquel Ferrer, Ángel Estivill, Eusebi Rodríguez Salas—, que no se integraron en el POUM y se incorporaron al PCE o a la Federación Socialista Catalana.

La propuesta de unificación catalana de Comorera no consiguió inicialmente más apoyo que el del Partit Català Proletari (PCP), cuyo líder Jaume Compte, había muerto en los enfrentamientos de octubre, hasta que las resoluciones del séptimo congreso de la IC, en agosto de 1935, le dieron un nuevo campo de desarrollo. El cambio fue saludado, incluso antes de que acabara el congreso comunista, por la USC, que invitó al PCC-PCE a sumarse al Comité de Enlace que había constituido con el PCP;⁶⁹ algo más tarde, el propio Comorera se dispuso a liderar la propuesta del partido único del proletariado, cuando publicó en noviembre de 1935 una carta abierta a los militantes de la USC en favor de un Partido Socialista de Cataluña (Sección Catalana de la Internacional Comunista)⁷⁰ integrado por

la USC, el PCP y el PCC-PCE. En el clima de euforia unitaria por el avance de las conversaciones para la formación del Frente Popular en España, el Comité Central del PCC-PCE acordó el 12 de enero su incorporación al Comité de Enlace; para la dirección del PCE y su tutor delegado de la IC, Lluís Codovila, dar una respuesta positiva a la oferta de Comorera podía favorecer la aceptación de la propuesta hecha al PSOE de iniciar, a su vez, el camino de la unificación. Esa hipótesis se reforzó después del triunfo electoral del Frente Popular el 16 de febrero y la Federación Socialista Catalana decidió a su vez, en marzo, sumarse al Comité de Enlace, que pasó a ser cuatripartito. A pesar de todo, la unificación de las cuatro organizaciones estaba prendida con pinzas. La USC y el PCP eran formaciones soberanas y las que más empujaban y con mayor acuerdo de sus militantes a la unificación; por el contrario, el PCC y la FSC eran las organizaciones regionales del PCE y del PSOE, dependían en última instancia de la decisión que tomaran los órganos de dirección de sus partidos, el Comité Central y el Comité Nacional y además en sus militancias era donde mayor oposición había al proceso de unificación. Algunos cuadros del PCC, con Antonio Sesé y José del Barrio a la cabeza, rechazaban la aproximación a la socialdemócrata USC y propugnaban, por el contrario, acercarse al POUM. En cuanto a la FSC, el mayor valedor de la unificación era Vidiella y el ala «caballerista» —que dominaba la Agrupación de Barcelona— que él encabezaba, reforzada por los recién incorporados procedentes del BOC, como Víctor Colomer; mientras que en otras agrupaciones con mayor presencia de seguidores de Prieto —como la de Tarragona— había oposición a las propuestas de Vidiella.

El Comité Ejecutivo de la IC, Dimitrov, decidió impulsar la unificación, que consideró como la mejor manera de tener alguna relevancia política en Cataluña: «Allí tenemos la posibilidad de realizar un acto audaz. Tenemos el partido socialista oficial, es decir la sección adherida al partido socialista de España. Tenemos la Unión Socialista de Cataluña, el partido catalán proletario (partido nacionalista). Pienso que una de las formas que puede permitirnos salir de esta situación es la de aclarar mejor nuestra táctica política ante esos partidos y explicar cuál debe ser el contenido político de los órganos del nuevo partido y ayudar a la formación de un nuevo partido ... Un partido obrero. Hablaremos más tarde. Pienso que es el medio por el cual llegaremos a superar el aislamiento en el que se encuentra nuestro partido en Cataluña». ⁷¹ En mayo los congresos de la USC, del PCP y la conferencia del PCC ratificaron la unificación. No obstante, la dirección de la IC no tenía una posición firme en la fijación de los tiempos; en junio, consideró retrasar la deseable unificación entre el PCE y

el PSOE a causa de la confusión política en la que se hallaban inmersos los socialistas —en aquellos momentos Prieto se estaba imponiendo en el seno del PSOE a Largo Caballero— y de la debilidad de la estructura de cuadros del PCE, problema crónico agravado por el rápido crecimiento del partido desde febrero de 1936.⁷² Las vacilaciones comunistas se reflejaron en un radiograma del mismo mes en el que se dieron instrucciones para frenar el proceso de unificación catalana.⁷³ Pudo ralentizarse, pero no se frenó; en cualquier caso no se dio marcha atrás en el proyecto general.

El 23 de junio, el Comité de Enlace de las cuatro organizaciones acordó un protocolo de unificación en un partido soberano, que recogía las tesis de la IC sobre el «partido único del proletariado» (dictadura del proletariado, centralismo democrático, reconocimiento de la IC como «la única Internacional que interpreta justamente las ansias del Proletariado mundial».⁷⁴ Quedaba por pronunciarse la FSC, cuyo congreso estaba previsto para la segunda quincena de julio; y, lo que podía llevar más tiempo, celebrar el congreso de unificación, que reglamentariamente no podría tener lugar antes de que el Comité Nacional del PSOE hubiese aceptado los acuerdos de su federación catalana. Los papeles estaban listos, pero sobre el momento del desenlace final todavía planeaban incertidumbres: las vacilaciones de la cúpula comunista y la división interna del PSOE, que además eran el motivo principal de aquellas vacilaciones. La sublevación y sus derivadas reventaron el globo de las dudas. La discusión sobre los tiempos quedó obsoleta ante el nuevo tiempo que se abrió de golpe.

La unificación, planteada hasta entonces como una conveniencia para seguir adelante se presentó como una necesidad absoluta para sobrevivir. Ya se ha explicado que hubo participación socialista y comunista en la lucha contra los sublevados en Barcelona; sin embargo, el peso que podían poner en la nueva balanza del poder no era significativo. Joan Comorera quiso salvar el protagonismo del Front d'Esquerres en las decisiones políticas que se tomaron mientras acababan los combates de julio, sin conseguirlo por más que estuviera presente en las idas y venidas del palacio de la Generalidad. En su relato de aquellos días Manuel Benavides escribió: «El error de Companys apresuró la unificación de los marxistas que, unificados, continuaron siendo débiles».⁷⁵ No hubo tal error, Companys no tenía otra opción que la del pacto con las organizaciones obreras y Comorera tampoco podía ofrecer una alternativa real a ese pacto; por lo demás, el resto del comentario es acertado, la acción de Companys precipitó el proceso de unificación que se había iniciado un año antes. Sin capacidad de iniciativa en el escenario general, Comorera decidió intervenir en su propio campo, darle fuerza mediante la unión como condición

previa para poder actuar con voz propia en aquel nuevo escenario y defender el retorno a la centralidad de la propuesta frentepopulista; tuvo el pleno apoyo de Vidiella, no hay que decir que el del minúsculo PCP y consiguió también el del secretario general del PCC-PCE, Miquel Valdés. No había tiempo para seguir preparando los congresos que quedaban, ni siquiera para consultas con las direcciones del PCE y del PSOE, que de ser consultadas no habrían dado el plácet.⁷⁶ El mismo 21 de julio el comité conjunto de los cuatro partidos decidió romper su ausencia en los acontecimientos publicando el primer número del diario *Treball*, cuya publicación no estaba prevista hasta agosto, después de que se hubiera realizado el congreso de la Federación Socialista Catalana;⁷⁷ para su confección se ocuparon las instalaciones del diario católico *El Matí* y a su cabecera se le añadió el subtítulo, de momento genérico, de «diario de los trabajadores de la ciudad y del campo», que señaló desde el principio a los dos sectores hacia los que se dirigía la nueva formación. En primera página y con grandes caracteres se anunció que las direcciones de los cuatro partidos habían decidido ya «fusionarse en un nuevo organismo» y que el diario sería su portavoz. Al día siguiente *Treball* dio el nombre que se había acordado, Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), «adherido a la Tercera Internacional»; el 23 se publicó una primera declaración en la que la fórmula de adhesión se refería ya a «a la Internacional Comunista» y se dio cuenta de la constitución de la dirección del partido, del Comité Ejecutivo, aunque en las primeras semanas se identificó, de manera equívoca, como «central»; y, finalmente, se firmó el acta formal de unificación, con fecha de 24 de julio, como reconocimiento de un acto consumado.

No hay que enredarse demasiado en el detalle de las fechas.⁷⁸ Lo fundamental fue que se tomó la decisión el mismo 21 y que su indiscutible promotor fue Comorera, aceptado por todos como secretario general y líder incontestable del nuevo partido; y que esa decisión fue propia de las cuatro organizaciones catalanas para responder a la situación creada en Cataluña, lo que la hizo irreversible a pesar del enojo que causó en la dirección del PCE que no pudo pasar de ahí. Codovila y José Díaz comunicaron a Dimitrov su desagrado, en radiograma del 30 de julio;⁷⁹ Codovila calificó de grave error la unificación, sostuvo que su responsable no era ni él, ni el PCC, pero no le quedó otro remedio que aceptar que el hecho no admitía marcha atrás, con el argumento de que fue un producto de la lucha contra la sublevación, lo que era objetivamente cierto. La dirección del PSOE, que no debió recibir la unificación con entusiasmo, tampoco se decidió a condenarla públicamente, la aceptó durante toda la guerra y habría que esperar hasta 1944 para que se reconstituyera una organiza-

ción catalana del PSOE en el interior y en el exilio.⁸⁰ El PSUC construyó rápidamente sus estructuras dirigentes.

El Comité Ejecutivo quedó integrado por once miembros: tres de la USC, tres del PCC, tres de la FSC y dos del PCP; el núcleo de la dirección lo constituyeron Comorera, secretario general, Vidiella, secretario de Relaciones, y Valdés, de Organización; Víctor Colomer, inicialmente como secretario de Agitación y Propaganda y a partir de primeros de agosto secretario agrario, Joaquín Almendros —de la FSC— secretario de Milicia, y Pere Ardiaca —del PCC, que renació de un largo ostracismo— secretario de Prensa y director de Treball.⁸¹ Al cuadro dirigente se adjuntaron dos figuras orgánicas, tradicionales de los partidos comunistas: desde el primer día la Comisión Político-Militar de la que era responsable Almendros, directamente controlada por la Secretaría General; más adelante la Comisión de Cuadros del Comité Central, con alguna pasarela discreta con la Comisión de Cuadros de la Internacional Comunista, y —más que probablemente— otra secreta con la NKVD, a cargo siempre de antiguos militantes del PCC, Joaquín Olaso y Pere Canals.⁸² Por otra parte, el PSUC heredó los miembros del aparato de la IC establecido en Cataluña, adscritos hasta entonces al PCC; entre ellos destacó el húngaro «José» Martín,⁸³ que llegó a ser secretario del Comité Catalán Pro Ejército Popular.⁸⁴ De momento no hubo todavía una presencia de mayor peso; Erno Gerö,⁸⁵ el delegado de la IC ante el PSUC, que fue delegado de segundo nivel de la IC en Francia entre 1925 y 1928 y 1932 y 1935 —cuando pudo conocer a Comorera— no llegó hasta primeros de octubre, seis días después de que lo hiciera el cónsul soviético en Barcelona, Antonov-Ovseenko.

El partido estuvo presente de inmediato en los diversos escenarios de movilización política y social. Miret y Vidiella lo representaron en el Comité Central de Milicias Antifascistas, en particular este último, que junto con Aurelio Fernández dirigió su Departamento de Investigación. Del Barrio, Manuel Trueba y Ángel Estivill se encargaron de formar y dirigir la columna militar del PSUC, que, con dos mil milicianos, partió para al frente de Aragón el 25 de agosto⁸⁶ y se instaló en la zona de Tardienta-Grañén; se denominó Carlos Marx, como el cuartel que disponía en Barcelona, y su dirección política y militar fue cayendo bajo la responsabilidad de José del Barrio, uno de los principales jefes militares de la República surgidos del mundo de las milicias. A comienzos de 1937 la División Carlos Marx estaba formada por cinco regimientos, uno de ellos en formación y otro de relevo, y seis baterías y ocupaba la zona del frente entre Tardienta y la sierra de Alcubierre; sus 8.400 hombres,⁸⁷ eran una quinta parte del total que sumaban las diversas milicias del frente de Ara-

gón. En contrapartida, su presencia institucional fue inicialmente muy limitada. No formaba parte del Gobierno de la Generalidad, que Comoreira —consejero de Agricultura desde 1934— había abandonado a finales de mayo, en un gesto «de izquierdas» congruente con su aproximación a la IC, del que bien pudo arrepentirse en las jornadas de julio. En los ayuntamientos, elegidos en 1934, apenas si tenía presencia; salvo excepciones como el de Molins de Rei, donde la USC era mayoritaria desde los inicios de la República, pero en este caso el ayuntamiento quedó marginado por el comité local, anarquista. Y en el universo de los comités tenía una presencia muy desigual, disminuida por el hecho de ser precisamente un nuevo partido en construcción; en muchos comités la representación en las primeras semanas de la guerra fue la de las organizaciones precedentes, pero no la del PSUC. El futuro de la presencia institucional del PSUC tendría que ver con la recomposición del marco institucional y con la construcción del partido; la primera tuvo que esperar algunos meses, lo inmediato fue convertir la decisión del 21 de julio en una fuerza militante sobre la que apoyar sus propuestas.

Su construcción empezó con la fusión a escala local de las organizaciones fundadoras; una tarea que no siempre resultó fácil y que ocupó buena parte del verano. Las primeras organizaciones locales unificadas fueron las de Mataró el 24 de julio⁸⁸ y Sabadell, el 26,⁸⁹ a pocos días del anuncio de la unificación. No obstante, el ritmo no fue tan rápido, de manera que el proceso de fusión por abajo se prolongó hasta mediados de otoño. La constitución del comité local de Barcelona no se anunció hasta el 4 de agosto, y todavía a comienzos de septiembre se estaba convocando a los militantes de los radios, en que se dividió la organización territorial de la capital, por su adscripción al partido de origen.⁹⁰ El Comité del PSUC de Granollers no se formó hasta el 22 de agosto;⁹¹ en Vilafranca del Penedès, también avanzado el verano;⁹² en Vic entrado el mes de septiembre;⁹³ en el mismo mes el de Lleida⁹⁴ y de Tremp⁹⁵ y Súria;⁹⁶ el de Sant Boi de Llobregat, a comienzos de octubre;⁹⁷ el de Solsona a mediados de éste.⁹⁸ El proceso de fusión en la base fue problemático en algunos casos. El informe del 13 de agosto de Joan Valldeperas —militante del PSUC integrado en la Sección de Comarcas del CCMA— indicó que el partido unificado sólo se había constituido de manera firme y estaba representado como tal en los comités locales de Banyoles, Figueres y Roses; en Santa Coloma de Farners y Tordera, la representación en el comité local figuraba todavía a cargo de la USC; en Calella, Sant Feliu de Guíxols, La Bisbal y Girona, a nombre del PCC; en Granollers y Sant Celoni, al de la agrupación local del PSOE. Peor era la situación de Terrassa, donde

desde comienzos de los años treinta existía una organización comunista local en la que destacaba un antiguo militante de acción anarquista, André Mora Escuté; esa organización estuvo representada en el comité local⁹⁹ y se había incautado del local del Círculo Tradicionalista en la ciudad,¹⁰⁰ pero se resistía a la unificación, hasta el punto de que a mediados de septiembre tuvo que ser enviado Josep Clos, desde la dirección del partido en Barcelona, para imponer la fusión y constituir el comité local del partido.¹⁰¹ No hace falta seguir con los ejemplos, la fusión de militancias se desarrolló con cierta lentitud para prolongarse hasta entrado el otoño.

La construcción del partido militante no se limitó a esa fusión, pues tuvo dos componentes más, la incorporación de afiliados procedentes de la izquierda del nacionalismo, y sobre todo la incorporación de nuevos afiliados. Desde finales de los años veinte el comunismo había ejercido una atracción sobre la nueva generación del nacionalismo de izquierdas movilizada en torno a Macià, si bien minoritaria, de la que, como he explicado, surgió el Partit Català Proletari. Durante la fase del Comité de Enlace hubo algún guiño hacia la corriente de Estat Català de ERC, sin resultado; ésta finalmente se constituyó en junio en partido, liderado por Dencàs, por la fusión de una parte de las Joventuts d'Esquerra Republicana-Estat Català (JEREC), con el grupo Nosaltres Sols, de Daniel Cardona y el muy reaccionario Partit Nacionalista Català, y se ancló definitivamente en el nacionalismo independentista. No obstante, de esos contactos y de las turbulencias que acompañaron a la ruptura interna de las JEREC y a la formación del nuevo partido Estat Català surgieron disidencias e insatisfacciones que encontraron una nueva opción en la fundación del PSUC, partido «nacional y de clase». Eso generó un limitado goteo de incorporaciones al PSUC: Antoni Perramon y Jaume Vachier, de la dirección de las JEREC, el Casal Nacionalista Republicà d'Esquerra del barrio barcelonés de Gràcia,¹⁰² las JEREC del Ateneu Nacionalista d'Esquerra de Poblenou¹⁰³ y del Casal del distrito Quinto,¹⁰⁴ Centro de ERC del pueblo de Verdú;¹⁰⁵ también trasvase de militantes individuales dispersos por toda la geografía catalana, incluida alguna personalidad de segundo nivel como Josep Antoni Trabal, de ERC. De todas maneras, aunque *Treball* le dio un trato informativo exagerado, nunca fue una avenida ni sus protagonistas tuvieron un peso específico en el PSUC, que a partir del *affaire* Rebertés en noviembre de 1936 se alejó a toda marcha de los nacionalistas. Sólo tuvieron algún peso político Antoni Perramón, que llegó a ser miembro suplente del Comité Central y Jaume Vachier, director general de las consejerías que desempeñó Comorera en el Gobierno de la Generalidad. No se dispone de documentación estadística sobre la procedencia

partidaria en el primer año de vida del PSUC, pero sí a partir del segundo semestre de 1937, y éstas mostraron que entre el 75 y 80 % de los militantes ingresados, desde entonces, no procedían de otras organizaciones; y sólo entre el 6 y el 7,5 % habían sido de ERC.

La mayoría de la militancia del PSUC se incorporó al PSUC sin afiliación partidaria previa.¹⁰⁶ En julio de 1936 los cuatro partidos fundadores sumaban entre 7.000 y 8.000 afiliados, una cifra modesta que la equiparaba con la cifra de militantes del POUM, a la que pudo añadirse algún centenar procedente del nacionalismo de izquierda; sin embargo, en el primer trimestre de 1937 el PSUC contaba ya con más de 35.000 militantes.¹⁰⁷ Ese salto fue producto de una propuesta política socialmente efectiva, el frente-populismo, y del esfuerzo proselitista desarrollado desde la formación del gobierno de unidad de la Generalidad, en los últimos días de septiembre, hasta finales de año. Y tuvo el acompañamiento de la expansión de la UGT que en vísperas de la guerra civil apenas contaba con unos 40.000 afiliados,¹⁰⁸ con presencia significativa en el transporte ferroviario, la dependencia mercantil, el sector de banca y bolsa, el puerto de Barcelona y fuera de Barcelona, en las comarcas del Maresme y el Tarragonés, el Alt y Baix Camp y la Conca de Barberà.¹⁰⁹ Su tendencia era a crecer, en contraste con el declive de la CNT que de los 300.000 afiliados de la primavera de 1931 había caído a los 160.000, incluyendo ya la mayoría de los Sindicatos de Oposición que en mayo se habían reintegrado a la Confederación.¹¹⁰ La UGT incorporó a la mayoría de los más importantes sindicatos que antes de julio de 1936 no pertenecían ni a UGT ni a CNT: la Federación Obrera de Unidad Sindical impulsada por el POUM con 40.000 afiliados; la Unió General de Sindicats Obrers de Catalunya promovida por la USC, que podía tener alrededor de 20.000; el Centre Autonomista de Depenents del Comerç i de la Indústria, dirigido entonces por militantes del PCP, con 23.000; la Federació Obrera de Sindicats de la Indústria Gastronòmica (FOSIG), vinculado al PCC con 8.000; los sindicatos de empleados y funcionarios de la Generalidad y del Ayuntamiento de Barcelona, con unos 6.000;¹¹¹ y algunas federaciones locales de los Sindicatos de Oposición que no retornaron a la CNT y que sumaban unos 15.000, la mayor parte de ellos en Sabadell. Un amplio campo de organizaciones con unos 110.000 afiliados, que reforzaron la competitividad de la UGT frente a la CNT y la posición política del PSUC, que hizo de la potenciación de la UGT uno de sus objetivos. La distancia entre ambos sindicatos se redujo hasta llegar casi a la par con la CNT, superando escasamente los 530.000 y la UGT alcanzando un máximo de 490.000; por primera vez la UGT estaba presente en prácticamente todas las comarcas de Cataluña y en el 80 % de los municipios.¹¹²